



**SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO**

Medellín, siete de marzo de dos mil veintitrés

21-167

Proceso: **CONSULTA**
Demandante: **YOVANI MONTES HOLGUÍN**
Demandado: **SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. y JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ**
Radicado No.: **05001-31-05-019-2018-00116-01.**
Decisión: **CONFIRMA ABSOLUCIÓN**

La Sala Tercera de Decisión Laboral, conformada por los Magistrados **MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA, MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO** y como ponente **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, procede a conocer en el grado jurisdiccional de CONSULTA la sentencia de primera instancia dentro del proceso de la referencia.

El Magistrado del conocimiento, doctor **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración de los restantes integrantes el proyecto aprobado en Sala virtual mediante **ACTA 07** de discusión, que se adopta como sentencia, en los siguientes términos:

1. SÍNTESIS FÁCTICA Y ANTECEDENTES

1.1 LO PRETENDIDO

Pretende el demandante que tras declararse por un perito experto en medicina laboral que sus patologías equivalen al 50% o más de pérdida de capacidad laboral de origen profesional se condene a la ARL SURA hoy SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. a reconocerle y pagarle la pensión de invalidez a partir de la fecha en que quede estructurada la pérdida de capacidad laboral, debidamente indexada o subsidiariamente en caso de que no se determine que tiene el 50% de pérdida de capacidad laboral se condene a la ARL SURA al reconocimiento y pago de la

indemnización por incapacidad permanente parcial según el porcentaje de invalidez alcanzado debidamente indexada, más las costas del proceso.

1.2. PARA FUNDAMENTAR SUS PRETENSIONES, EXPUSO LOS SIGUIENTES HECHOS:

- Que el 27 de enero de 2007 mientras se encontraba laborando en SOFASA para la empresa ALMAGRAN hoy SUPPLA S.A. sufrió un accidente al caer de un andamio lesionándose la rodilla y el tobillo del pie derecho; sin embargo el accidente no fue reportado por el empleador.
- Que el 16 de abril de 2007 encontrándose laborando para los mismos empleadores sufrió otro accidente laboral, el cual tampoco fue reportado, esta vez se le diagnosticó “dolor a la flexión lumbar, al flexo extensión MID, lumbalgia y hernia discal y se le recetaron medicamentos.
- Que a raíz de estos accidentes le dieron incapacidades laborales y se le inició una serie de terapias.
- Que luego de 98 sesiones de terapia de rehabilitación, 215 días de incapacidad, de un sinnúmero de medicamentos, de manejo por la clínica del dolor, de idas y venidas por más de 8 años, continua con la misma enfermedad lumbar sin presentar mejoría.
- Que el 18 de enero de 2015 SURA calificó su enfermedad lumbar como de origen común, la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA lo calificó como de origen profesional y el 25 de enero de 2016 la JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ lo confirmó.
- Que el 13 de septiembre de 2016 la ARL SURA le asignó un 23.1% de pérdida capacidad laboral de origen laboral, el 25 de mayo de 2017 la JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ le asignó el 25.7% de pérdida de capacidad laboral por riesgo laboral por lo que fue indemnizado por ese porcentaje.
- Que continúa padeciendo de la enfermedad lumbar, la cual se ha intensificado con el paso del tiempo, además de que a ello se sumó la enfermedad del maguito rotador derecho.
- Que cuando ingresó a laborar a ALMAGRAN no padecía de las dolencias que lo aquejan, pero en la actualidad tiene 57 años de edad, los accidentes le afectaron su capacidad laboral al punto que lo tienen limitado de manera grave, pues no puede levantar objetos de más de 5 kilos de peso, no se puede agachar, no puede hacer movimientos repetitivos, estar en una misma posición por más de 15 minutos, lo que afectó su vida social, familiar, conyugal y sexual.
- Que ni la EPS SURA ni la ARL SURA le dan más incapacidades solo le dicen que *“con eso no se va a mejorar, que se acostumbre a vivir con el dolor”*
- Que conforme al artículo 7º de la Ley 776 de 2002 al tener una patología de carácter progresivo se podrá volver a calificar y modificar el porcentaje de pérdida de capacidad laboral.

- Que es una persona diestra para realizar las diferentes actividades de la vida y debido a la enfermedad del manguito rotador, ya casi no puede utilizar esa mano, lleva 83 terapias y el ortopedista le dice que se recupera por ahí en 10 años a punta de terapias, por lo que SURA se niega a volver a calificarle la enfermedad porque continua en tratamiento con la clínica del dolor.

1.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

SURAMERICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS se opuso a la prosperidad de las pretensiones. Frente a los hechos aclaró que el accidente a que se refiere el actor en el hecho primero ocurrió fue el 29 de enero de 2009 y que consistió en una contusión de rodilla, aclaró que el incidente fue reportado y la ARL SURA en cumplimiento de sus obligaciones procedió al reconocimiento de las prestaciones asistenciales y económicas requeridas. Indicó que no le consta el otro supuesto accidente laboral al que se hace referencia pues como lo confiesa el actor este no fue reportado a la ARL, pero aclara que es improbable que un incidente laboral pueda generar de manera inmediata una lumbalgia una hernia discal ya que estas son dolencias que se generan con el paso del tiempo. Frente a las incapacidades señaló que se atiene a lo que obre en el expediente pues las mismas fueron reconocidas en principio por la EPS. Aceptó lo descrito frente a como se dio el proceso de calificación del actor donde atendiendo a las disposiciones legales primero se definió el origen y después de haberse determinado que las dolencias eran de origen laboral, la ARL SURA procedió a calificar el grado de pérdida de capacidad del demandante, donde finalmente se determinó que era del 25.7% por lo que se le pagó una Indemnización Permanente Parcial en los términos del Decreto 2466 de 1994 por valor de \$15.013.475 el 16 de junio de 2017. Respecto a los demás hechos señaló que no le constan o se trata de apreciaciones de la parte actora.

JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ se opuso a las pretensiones de la demanda. Respecto a los hechos aceptó que el actor tuvo un accidente de trabajo el 27 de enero de 2007 y el 16 de abril de 2016, la calificación efectuada por SURA, por la JUNTA REGIONAL y por dicha entidad, según documentación que obra en el expediente de calificación. En cuanto a los restantes hechos indicó que no le constan por lo que deberán ser objeto de debate probatorio.

1.4.1 DECISIÓN PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia proferida por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín, **ABSOLVIÓ a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. y la JUNTA NACIONAL DE**

CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ de todas las pretensiones formuladas en su contra por el señor **YOVANY MONTES HOLGUÍN**, a quien se abstuvo de condenar en costas.

2. ARGUMENTOS

2.1. ARGUMENTOS DEL JUEZ

En vista de que el actor presentó inconformidad con el dictamen de pérdida de capacidad laboral emitido por la JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ que le determinó una pérdida de capacidad laboral del 25.70% de origen profesional, se decretó prueba pericial, siendo evaluado nuevamente por la el CENDES de la UNIVERSIDAD CES, donde se le determinó un porcentaje del 23.4% estructurada el 25 de enero de 2016, es decir, que se estableció que el origen era el mismo pero que la pérdida de capacidad laboral era inferior al fijado por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, el cual fue acogido por el a quo dado que este cumplía los presupuestos que establece manual único de calificación del Decreto 1507 de 2014, sin que el despacho cuente con los elementos técnicos para apartarse del mismo. Por tanto concluyó el a quo que conforme al referido dictamen como el actor tenía una pérdida de capacidad laboral inferior al 50% no era posible reconocer la pensión de invalidez deprecada y como el porcentaje determinado por el perito incluso había sido inferior al determinado en su momento por la Junta tampoco era posible reajustar la indemnización por incapacidad permanente parcial que fue reconocida al actor por ARL SURA hoy SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA por lo que **ABSOLVIÓ** a las demandadas de todas las pretensiones en su contra.

2.2. CONSULTA

Dentro del término otorgado por la Ley NO se interpuso ningún recurso, debiendo ser conocido el proceso en el grado jurisdiccional de **CONSULTA**, según lo dispuesto el artículo 69 del CPT y SS, ya que la sentencia fue totalmente adversa al demandante.

2.3. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Dentro del término de traslado no se presentaron alegatos de conclusión.

3. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO EN ESTA INSTANCIA

Consiste en determinar si al señor YOVANI MONTES HOLGUÍN le asiste o no derecho a la pensión de invalidez o al reajuste de la indemnización por pérdida permanente parcial o la pensión de invalidez, analizando si dentro del proceso se acreditó una pérdida de capacidad laboral superior a la que fue determinada por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Pretendía el demandante a través del presente proceso controvertir el porcentaje de pérdida de capacidad laboral otorgado por la JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ, con el argumento que en el mismo no se estudió a fondo su verdadero de estado de salud, ya que se le otorgó un porcentaje del 25.70%, aduciendo que debió otorgársele un porcentaje superior.

Bajo este contexto y antes de adentrarnos a analizar el tema que comporta objeto de estudio por parte de la Sala, es importante precisar algunos aspectos sobre la competencia para realizar dictámenes mediante los cuales se emite un concepto técnico que, entre otros, determina la merma de capacidad laboral, lo que a su vez permite analizar la viabilidad de las suplicas contenidas en el libelo genitor.

Al respecto vale traer a colación lo dispuesto en el **ARTÍCULO 41 de la Ley 100 de 1993** modificado por el artículo 142 del Decreto 19 de 2012 que reza:

“Corresponde al Instituto de Seguros Sociales, Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES-, a las Administradoras de Riesgos Profesionales- ARP-, a las Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte, y a las Entidades Promotoras de Salud EPS, determinar en una primera oportunidad la pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez y el origen de estas contingencias. En caso de que el interesado no esté de acuerdo con la calificación deberá manifestar su inconformidad dentro de los diez (10) días siguientes y la entidad deberá remitirlo a las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez del orden regional dentro de los cinco (5) días siguientes, cuya decisión será apelable ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, la cual decidirá en un término de cinco (5) días. Contra dichas decisiones proceden las acciones legales.”

En este sentido se destaca la importancia que tienen dichos conceptos, dado que en principio constituyen el fundamento para que las entidades que administran el Sistema de Seguridad Social deciden sobre el reconocimiento y pago de determinadas prestaciones económicas a las que podría tener derecho el afiliado, sin que sea admisible, sin fundamento alguno, apartarse de su contenido, incluso un juez no estaría facultado para dictaminar en forma definitiva y **sin el apoyo de especialistas en la materia**, asuntos tan técnicos como la distribución porcentual que apareja una

patología, toda vez que es un hecho que debe ser establecido científicamente, conocimiento que claramente escapa al resorte de las competencias de un operador jurídico.

Así las cosas, el dictamen que emite la Junta Nacional de Calificación de Invalidez como órgano de cierre no tiene ningún recurso, solamente existe la posibilidad de rebatir su contenido dentro de un proceso ordinario laboral, siendo ello la génesis de esta acción, escenario en el que, debiendo mediar razones atendibles, se intenta contrariar los conceptos que sobre el tema hayan emitido los órganos competentes.

Por ello, tanto la parte actora como el a quo contaba con la opción de solicitar la realización de una pericia para efectos de analizar por quien fungiría como auxiliar de la justicia, el porcentaje aludido, dado que si un concepto administrativo atara al operador jurídico carecería de sentido la intervención de la jurisdicción laboral, razonamiento plasmado por la Sala de Casación Laboral en sentencias como las de radicación 29.328, reiterada en la 29.622 y 31.062, que al referirse al tema, señaló que por ello es necesario que el fallador, para efectos de definir el estado de invalidez objeto de controversia, acuda al apoyo de un ente especializado en la materia, al no contar con la potestad de dictaminar en forma definitiva, sin el apoyo de los conocedores de la materia, si un trabajador está realmente incapacitado o no y cuál es la etiología de su mal, como tampoco cuál es el grado de la invalidez, ni la distribución porcentual de las discapacidades y minusvalías.

Y es precisamente la distribución porcentual el asunto sobre el que se edifica esta controversia, dado que la JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ (fl 683), le asignó un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 25.70% estructurada el 25 de mayo de 2017 de origen laboral, en el cual se tuvo en cuenta los diagnósticos **lumbago no especificado, discopatía lumbar y lumbalgia crónica.**

Para controvertir el referido dictamen, en audiencia celebrada el 24 de julio de 2019 se decretó prueba pericial en la cual se remitió al actor al CENDES de la UNIVERSIDAD CES para que determinara el porcentaje de pérdida de capacidad laboral. Dictamen emitido en octubre de 2020, visible a folios 859 a 872 del expediente digital, donde se le calificó una pérdida de capacidad laboral del **23.4%** de origen laboral estructurada el 25 de enero de 2016, con base en los diagnósticos: **dolor crónico de columna lumbar por osteoartrosis degenerativa y estenosis del canal.**

Dicho dictamen se aportó al proceso desde 22 de octubre de 2020, sin que ninguna de las partes presentara controversia, en los términos del artículo 228 del Código General del Proceso.

De ahí que el a quo no tuvo ninguna limitante a la hora de acoger su contenido, pues tal y como él lo señaló, no contaba con los elementos técnicos para apartarse de las conclusiones dadas por el médico perito, pues no es de resorte del operador jurídico examinar asuntos tan técnicos como este, precisamente se vale de especialistas en la materia para efectos de esclarecer los hechos objetos de controversia. Así lo consagra la ley estatutaria de administración de justicia, Ley 270 de 1996, cuando se refiere a la conformación de las listas de auxiliares como apoyo a los falladores dados sus conocimientos técnicos y científicos, con medios idóneos para la calificación a partir de un grupo interdisciplinario, de ahí que las juntas de calificación no sean las únicas facultadas para emitir dictámenes válidos al interior de un proceso judicial, ni se espere del fallador un análisis médico.

Además se observa que la UNIVERSIDAD CES tuvo en cuenta la historia, los exámenes clínicos y diagnósticos practicados al demandante, enlistó cronológicamente diversos apartes de la historia clínica, relacionó los documentos en los que fundaba la calificación, valoró el diagnóstico motivo de la calificación y describió las deficiencias, discapacidades y minusvalías para determinar el porcentaje total y la fecha de estructuración, sin que encuentre esta Magistratura razones atendibles para desconocer el concepto técnico, pues aunado a ello tampoco se cuenta con los conocimientos técnicos para rebatir las conclusiones a las que llegó el perito respecto al porcentaje de pérdida de capacidad laboral asignado al actor.

Por consiguiente, es claro que tal y como lo estimó el a quo, al haberse determinado que el señor YOVANI MONTES HOLGUIN tiene una pérdida de capacidad inferior al 50% no se cumplen los requisitos para acceder a la pensión de invalidez de origen laboral deprecada en los términos del artículo 9º de la Ley 776 de 2002 y tampoco hay lugar al reajuste de la indemnización por incapacidad permanente parcial que le fue reconocida por la ARL SURA hoy SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA en junio de 2017 con base en un **25.70%** de pérdida de capacidad laboral, que fue el porcentaje asignado por la JUNTA NACIONAL DE CALIFICACION DE INVALIDEZ, pues el porcentaje asignado por la UNIVERSIDAD CES del 23.4% resultó ser inferior, por lo que no hay lugar a acceder a las suplicas de la demanda.

En consecuencia se CONFIRMARÁ la decisión de primera instancia revisada en el grado jurisdiccional de CONSULTA.

Sin costas en esta instancia.

4. DECISIÓN DEL TRIBUNAL

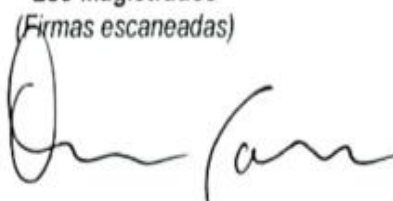
Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral, administrando justicia en el nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, **DECIDE**

PRIMERO: CONFIRMA la sentencia proferida el 22 de junio de 2021 por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín dentro del proceso ordinario promovido por el señor **YOVANI MONTÉS HOLGUÍN** identificado con c.c. 71.603.630 contra **SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.** y la **JUNTA NACIONAL DE CALIFICACION DE INVALIDEZ**, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia.

Lo anterior se notificará por **EDICTO** que se fijará por la Secretaría por el término de un día.


Los Magistrados
(Firmas escaneadas)



ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA



MARIA NANCY GARCÍA GARCÍA



MARTHA TERESA FLOREZ SAMUDIO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
SALA LABORAL



SECRETARÍA

EDICTO

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Demandante: **YOVANI MONTES HOLGUÍN**
Demandado: **SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. y JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ**
Radicado No.: **05001-31-05-019-2018-00116-01.**
Decisión: **CONFIRMA ABSOLUCIÓN**
Fecha de la sentencia: **07/03/2023**

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/148> por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy **08/03/2023** desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario